

18-2016

Presidencia de la República de El Salvador, Unidad de Acceso a la Información Pública: En la ciudad de San Salvador, a las once horas del dieciséis de febrero de dos mil dieciséis.

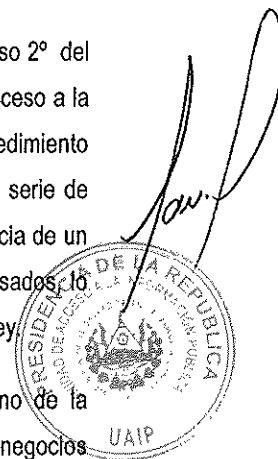
El suscrito Oficial de Información, CONSIDERANDO que:

1. El día doce del mes y año en curso se recibió solicitud de acceso de información, a nombre de [REDACTED] quien requiere: "(...) 1. Nominas de Instituciones del Gobierno Central que apoyan el emprendedurismo en El Salvador. 2. Listado del tipo de servicio que ofrecen. 3. El presupuesto asignado para ofrecer los servicios. 4. El número de funcionarios o empleados técnicos disponibles para ofrecer los servicios. 5. El número de usuarios de los servicios de los últimos 5 años, segregados por departamentos, por sector económico, por tipo de actividad, género y segmento demográfico".
2. Con base a las atribuciones de las letras d), i) y j) del artículo 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública (en lo consiguiente LAIP), le corresponde al Oficial de Información realizar los trámites necesarios para la localización y entrega de la información solicitada por los particulares, y resolver sobre las solicitudes de información que se sometan a su conocimiento.
3. A partir del deber de motivación genérico establecido en los artículos 65 y 72 LAIP, las decisiones de los entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante, con mención breve pero suficiente de sus fundamentos.

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA DE LA SOLICITUD.

En el caso de autos, el suscrito advierte que si bien el peticionario no dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 66 LAIP, 54 y 55 de su Reglamento en relación al artículo 278 CPC, es decir presentar el escrito de acceso a la información, debidamente firmado, corresponde hacer de su conocimiento que a partir de la naturaleza del procedimiento de acceso a la información pública, para la correcta configuración del acto administrativo se requiere de una serie de elementos para dar cumplimiento pleno a la obligación establecida en el artículo 2 LAIP. Entre ellos la existencia de un sujeto legalmente apto para dar trámite a los requerimientos de acceso a la información pública de los interesados, lo cual únicamente puede derivar del marco de competencias atribuidas a cada uno de los entes obligados por la ley.

En tal sentido, la competencia entendida como la medida de la potestad que corresponde a cada órgano de la Administración atribuida por la ley a cada uno de los entes obligados. De manera que, la gestión de los negocios públicos pueda realizarse de manera específica, eficiente y expedita a los mandatos legales encomendados a cada institución.



Así, por ejemplo, el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo (en lo sucesivo RIOE) establece la distribución funcional de las entidades que componen el Órgano Ejecutivo en Ministerios o Secretarías de Estado, designando a cada uno de ellos un Ministro o Viceministro como titulares de esa institución, artículos 28 y 31 RIOE. En esa perspectiva, la competencia funcional de cada una de esas instituciones persigue un conjunto de objetivos diferenciados pero vinculados directamente al Presidente de la República.

De igual manera, de conformidad al artículo 46 RIOE, las Secretarías de la Presidencia como unidades adscritas directamente al servicio de la Presidencia de la República actúan como órganos de coordinación con los Ministerios y las restantes entidades adscritas al Órgano Ejecutivo. De ahí que, sus competencias funcionales difieran del resto de órganos de gobierno, siendo sus alcances limitados a lo previsto por la ley.

Por tales motivos, a partir de las competencias funcionales atribuidas a cada dependencia que conforma el Órgano Ejecutivo, las Unidades de Acceso a la Información Pública (UAIP) sólo pueden iniciar y tramitar solicitudes de acceso cuando la información requerida por los peticionarios recaiga dentro del ámbito de competencia funcional atribuida a cada institución. Siendo plausible afirmar que esta UAIP solo puede conocer de los procedimientos de acceso cuando ellos recaigan sobre información de cualquiera de las Secretarías de la Presidencia mencionadas en los artículos 46 y siguientes del RIOE, y cada una de sus respectivas unidades administrativas.

En esa línea de argumentos, como se ha señalado anteriormente en otras resoluciones emitidas por esta Unidad, a partir del artículo 102 LAIP y 20 del Código Procesal Civil y Mercantil (en adelante CPCM), los vacíos en el procedimiento de acceso a la información dirigidas a la Presidencia de la República serán suplidos por las disposiciones del CPCM. Por lo que son aplicables todas aquellas disposiciones de ese cuerpo legal relacionadas a la decisión sobre la competencia para la tramitación de un proceso, ya sea este de carácter administrativo o judicial, artículo 45 CPCM.

En el caso de autos, debe señalarse al peticionario que la pretensión de información relativa a: "(...)1. *Nominas de Instituciones del Gobierno Central que apoyan el emprendedurismo en El Salvador.* 2. *Listado del tipo de servicio que ofrecen.* 3. *El presupuesto asignado para ofrecer los servicios.* 4. *El número de funcionarios o empleados técnicos disponibles para ofrecer los servicios.* 5. *El número de usuarios de los servicios de los últimos 5 años, segregados por departamentos, por sector económico, por tipo de actividad, género y segmento demográfico*", no recaen dentro del ámbito de competencia que el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo (en adelante RIOE) señalan a este ente obligado.

No obstante, el suscrito advierte que la información pretendida versa sobre las atribuciones establecidas a la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (en adelante CONAMYPE), en relación a: *i) Promover la existencia e institucionalización de programas, instrumentos y servicios empresariales de fortalecimiento y desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa con énfasis en aquellos dirigidos a manejar la situación y necesidades de las mujeres emprendedoras y empresarias, ii) Fomentar el espíritu emprendedor y creativo de la población, apoyando la creación de nuevas empresas promoviendo la iniciativa e inversión privada y la libre competencia, iii) Promover y propiciar activamente en condiciones de equidad el acceso de las mujeres emprendedoras y empresariales a las oportunidades que ofrecen los*

programas de promoción, formalización y desarrollo empresarial, iv) Reconoce al Ministerio de Económica como el órgano rector para la ejecución del contenido de la Ley. ¹

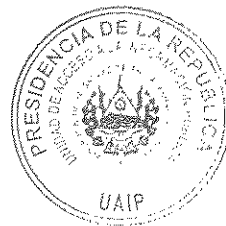
Consecuentemente, el señor [REDACTED] deberá dirigir sus pretensiones de información a la Unidad de Acceso a la Información Pública de tal ente obligado², no siendo competente esta Presidencia de la República para la gestión de esa documentación.

Con base a las disposiciones legales citadas y los razonamientos antes expuestos, se RESUELVE:

1. Declárese incompetente la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Presidencia de la República para conocer sobre la información pretendida por el peticionario, con base a lo dispuesto en los artículos 68 inciso 2º LAIP y 49 de su Reglamento.
2. Declárese sin lugar el inicio del procedimiento de acceso a la información pública por ser improponible según los términos descritos en los párrafos que preceden, con base en los artículos 102 LAIP, 20 y 45 CPCM.
3. Hágase de conocimiento al señor [REDACTED] que puede interponer su solicitud de información ante la Oficina de Información y Respuesta de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, mediante escrito dirigido al Oficial de Información de dicha entidad, Erika Mariela Miranda Ramírez, ubicada en 25 Avenida Norte y 25 Calle Poniente, edificio Gazzolo, Segunda Planta, San Salvador
4. Notifíquese al interesado en el medio y forma señalado para tales efectos.



Pavel Benjamín Cruz Álvarez
Oficial de Información
Presidencia de la República



¹ Artículos 2, 6 y 7 de la Ley de Fomento, Protección, y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa.

² emiranda@conamype.gob.sv